

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### SALA DE DECISIÓN LABORAL

El ocho (08) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a emitir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por el señor **JORGE ENRIQUE RÍOS SARRIA (Fallecido)** contra la sociedad **INTEGRAL S.A., INTEGRAL INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN S.A.S. y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES (en adelante COLPENSIONES)**, tramitado bajo el radicado único nacional No. **05001-31-05-014-2018-00633-01**.

### AUTO

De conformidad con el memorial allegado a través de correo electrónico, el abogado FABIO ANDRÉS VALLEJO CHANCI, quien funge como representante legal de la sociedad PALACIO CONSULTORES S.A.S., presenta renuncia al mandato conferido por COLPENSIONES. Teniendo en cuenta que con dicho escrito adjunta las constancias mediante las cuales se evidencia que la entidad está enterada de dicha decisión y que con ello se cumple lo estipulado en el artículo 76 del CGP, se acepta la renuncia al poder presentada por FABIO ANDRÉS VALLEJO CHANCI, en calidad de representante legal de la sociedad PALACIO CONSULTORES S.A.S.

De otro lado, se encuentra el poder especial allegado vía correo electrónico por parte de la sociedad CAL & NAF ABOGADOS S.A.S. quien representa judicialmente los intereses de COLPENSIONES en este proceso, se procede a reconocer personería a la abogada CLAUDIA LILIANA VELA, portadora de la T.P. 123.148 del C. S. de la Judicatura, para que represente a COLPENSIONES en este proceso como apoderada principal y a la Dra. KELLY YISETH HOLGUÍN SERNA, portadora de la T.P. 238.479 del C. S. de la Judicatura como apoderada sustituta.

De igual forma, se reconoce personería para seguir representando los intereses de INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISIÓN S.A.S. al Dr. CARLOS MANUEL URIBE MESA, portador de la T.P. 103.728 del C.S. de la J. y a la Dra. LINA MARCELA SÁNCHEZ BELTRÁN, portadora de la T.P. 359.811 del C.S. de la J. quienes actuarán en calidad de apoderado principal y sustituto de la sociedad demandada respectivamente.

El magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

### **1. ANTECEDENTES:**

El actor pretende con la demanda, que se condene a INTEGRAL INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN S.A.S. como única socia de la Sociedad TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA. y/o la sociedad INTEGRAL S.A. como controlante de la primera, de manera conjunta, solidaria o separada, a cancelar y trasladar a COLPENSIONES, el valor correspondiente a la reserva actuarial o proceda a constituir el título pensional respectivo, por el tiempo laborado por el demandante, entre el 24 de abril de 1978 y el 22 de octubre de 1978, y del 01 de diciembre de 1978 al 30 de octubre de 1980, tiempos en los que no hubo cotizaciones al sistema de invalidez, vejez y muerte (IVM).

De igual forma, pretende que se condene a COLPENSIONES, a liquidar, cobrar y recibir de las sociedades demandadas, el valor de la reserva actuarial o título pensional y que conforme a ello, se condene a dicha entidad a corregir la historia laboral incluyendo las cotizaciones faltantes, y se condene a pagar la pensión de vejez teniendo en cuenta los periodos omitidos y los del cálculo actuarial, pensión que solicita sea reconocida sobre 14 mesadas pensionales y el IBL de los últimos 10 años, como beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

**Como fundamento fáctico de las pretensiones**, narra el demandante que nació el 04 de agosto de 1948, y que estuvo cotizando para los riesgos de IVM al ISS hoy COLPENSIONES, desde el 20 de marzo de 1968.

Aduce que la empresa INTEGRAL S.A. mediante certificado expedido el 14 de noviembre de 1985, indicó que laboró para dicha empresa en los siguientes periodos:

- Abril 24 de 1978 a octubre 22 de 1978, con TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA.
- Diciembre 01 de 1978 a octubre 30 de 1980 con TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA.
- Agosto 12 de 1981 a agosto 12 de 1984 con TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA.
- Septiembre 3 de 1984 a marzo 21 de 1985 con INTEGRAL S.A.

Indica el accionante, que presentó acción de tutela, sin embargo, INTEGRAL S.A. negó la relación laboral, pese al certificado existente y señaló que la sociedad Topografía y Trazados LTDA. era otra entidad diferente a ella.

Afirma, que la sociedad INTEGRAL INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN S.A.S., era la única socia de TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA. hoy liquidada y, por tanto, responde de carácter ilimitado frente a las acreencias laborales.

De otro lado, refiere que la sociedad INTEGRAL S.A., controla a la sociedad INTEGRAL INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN S.A.S., quien era la única socia de TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA., en razón de ser la casa matriz y, por tanto, responde solidariamente ante la negativa de responder por las obligaciones laborales, al ser controladora de la misma.

Afirma, que recibía órdenes e instrucciones de la sociedad INTEGRAL S.A., y el pago de salarios y demás obligaciones laborales, razón por la cual la sociedad certificó el tiempo de servicio, siendo ésta su verdadero empleador.

Dice que solo fue afiliado a los seguros de IVM el 23 de enero de 1983, pese a haber iniciado labores de tiempo atrás, que tampoco han trasladado a COLPENSIONES las semanas dejadas de cotizar cuando estuvo a su cargo la pensión, tal y como lo han señalado las Altas Cortes, faltando en su historia laboral un total de 239 semanas.

Expone, que solicitó a COLPENSIONES la pensión de vejez, pero la entidad mediante Resolución GNR 387017 del 21 de diciembre de 2016, se la negó tras considerar que solo contaba con 1184 semanas cotizadas, tampoco le reconoció el beneficio de la transición, situación que afecta su derecho a adquirir la pensión de vejez, puesto que las semanas cotizadas con aquellas que no son tenidas en cuenta por COLPENSIONES, así como las dejadas de cotizar, acreditaría un total de 1475 semanas, las que son suficientes para declarar que es beneficiario del régimen de transición y con ello, condenar a la citada prestación de vejez.

## **2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:**

La oficina judicial de primera instancia despachó de manera favorable las pretensiones de la demanda. Declaró que entre INTEGRAL S.A. e INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S. existe una unidad de empresa, y por lo tanto son solidariamente responsables de las obligaciones de la extinta sociedad TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA. Condenó a INTEGRAL S.A. e INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S. a sufragar el título pensional que corresponda por el período comprendido entre el 24 de abril de 1978 al 22 de octubre de 1978, entre el 1 de diciembre de 1978 al 30 de octubre de 1980, y entre el 12 de agosto de 1981 y el 17 de octubre de 1984, a entera satisfacción de acuerdo al cálculo actuarial que previamente realice COLPENSIONES. También ordenó a COLPENSIONES realizar la liquidación del cálculo actuarial de conformidad con el Decreto 1887 de 1994 y una vez realizado el mismo, informe a INTEGRAL S.A. e INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S. para que en el término máximo de un mes, procedan a constituir y pagar el título pensional correspondiente. Seguidamente, declaró que el señor JORGE ENRIQUE RÍOS SARRIA, tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, en calidad de beneficiario del régimen de transición pensional previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en consonancia con el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, a partir del 1 de septiembre de 2016 y ordenó a COLPENSIONES efectuar dicho reconocimiento, y a pagar las mesadas pensionales retroactivas de forma indexada.

Para arribar a dicha decisión, expuso el *a quo*, que, si bien el tema de la unidad de empresa no fue un asunto planteado en las pretensiones de la demanda, considera que fue un tema transversal que se dilucidó con la práctica de la prueba, por lo que

al ser un derecho a la seguridad social en pensiones, el cual es motivo de controversia, no podía ser ajeno a dicha realidad.

Expuso que la unidad de empresa se presentaba cuando se demostraba el predominio económico de una empresa respecto de otra, similitud entre ambas en su objeto social y conexidad.

Indicó que una de las sociedades demandadas certificó el tiempo laborado por el accionante, misma que era suficiente para dar por probado que prestó el servicio a la empresa TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA. Y con ello declarar la existencia de la relación laboral, sin que se hiciera uso de la prueba testimonial traída al proceso por el accionante, ya que considera que el testigo no fue claro en sus declaraciones.

Dijo que al revisar los certificados de existencia y representación, se observa que la sociedad INTEGRAL S.A., hace parte de un grupo empresarial y que es la sociedad matriz, que controla a INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S., que a su vez, era la socia predominante o mayoritaria de TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA., las cuales tenían como objeto común, la relacionada con todas las obras de ingeniería y construcción de proyectos de gran envergadura, como la construcción de las represas que hacen parte del complejo de Guatapé o Jaguas como hacía referencia la prueba testimonial.

Conforme a lo anterior, adujo que se podía predicar la existencia de los elementos esenciales de la unidad de empresa frente a quienes fueron citados al proceso, esto es, la sociedad INTEGRAL S.A., como empresa matriz e INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S., como sociedad controlada, ya que existe un predominio de la matriz frente a la sociedad subordinada, sin que importara que TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA., haya sido liquidada, pues dicha figura se constituye para salvaguardar el derecho a la seguridad social en pensiones del trabajador, al servicio de la extinta empresa. Incluso, mencionó que a través de la figura de sucesión procesal, los sucesores podían comparecer para que se les reconociera tal carácter y en todo caso, la sentencia produciría efectos respecto de ellos así no concurren.

De otro lado, frente al tema de la pensión de vejez, adujo que el accionante a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con más de 40 años de edad, lo que lo hacía beneficiario del régimen de transición, que además, a la entrada en

vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, contaba con 587.31 semanas cotizadas, más las 239.41 semanas que serían canceladas por como título pensional, además de otras semanas que aparecen con inconsistencias entre enero de 1967 y marzo de 1968, en total acreditaría 878.18 semanas, por lo que podía extender la expectativa para consolidar el derecho a la pensión de vejez hasta el 31 de diciembre de 2014, momento para el cual contaba con más de 1000 semanas de cotización, razón por la cual condenó a COLPENSIONES al pago de la citada prestación, a partir del 01 de septiembre de 2016, fecha de la última cotización efectuada por el actor.

### **3. DEL RECURSO DE APELACIÓN**

La sentencia fue recurrida por la apoderada judicial de las sociedades demandadas, y por la apoderada de COLPENSIONES en los siguientes términos:

#### **APELACIÓN DE INTEGRAL S.A. e INTEGRAL INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN S.A.S.**

Estas sociedades se oponen a la condena que se les impone, afirmando que incluso el Despacho parte de la base que la sociedad TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA., fue liquidada desde el año 2015, sin que para ese momento se hubiera efectuado algún reclamo por parte del trabajador demandante. Dice que incluso cuando se habla de favorabilidad en temas de seguridad social, la empresa debe previamente conocer la situación mediante previo reclamo, pero en este caso, cuando la empresa dejó de existir, no fue puesto de presente dicha situación por el accionante.

Ahora, frente al tema de la unidad de empresa, señala que no es posible en este caso su declaratoria, por cuanto se requiere de un proceso especial y de ciertas condiciones de las que ya ha hablado la Corte Suprema de Justicia, quien en providencia SL6228 del 11 de mayo de 2016, adujo que no siempre que se esté en presencia de un grupo empresarial, conformado por una sociedad principal o matriz y varias subordinadas necesariamente hay unidad de empresa, ya que se hace indispensable verificar en todos los casos el factor de predominio económico o relación de dependencia económica que exige el mandato laboral, que lo comprende tanto la participación accionaria como en control financiero y

administrativo entre la sociedades común y reciproco que lleve a inferir que la subsidiarias se encuentran directamente sometidas a la controlante, además, que todas ellas deben cumplir actividades similares conexas o complementarias. En ese sentido, dice que en el presente asunto no es válido hablar de unidad de empresa con una sociedad que se encuentra liquidada, ni tampoco se puede pensar en declarar la sucesión procesal, porque no se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 68 del CGP.

También indica que ni en el Código Sustantivo del Trabajo, ni en el Código Civil, existe alguna fuente de solidaridad predicable de las sociedades demandadas, ya que considera que es muy paradójico, que el juzgado decida condenar con la misma cuerda procesal a ambas sociedades, sabiendo que incluso entre ellas y la extinta TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA hay diferencias, consideraciones que no tuvo en cuenta el juzgado de instancia.

Aunado a lo dicho, menciona que en este caso tampoco existe una integración empresarial, porque los periodos faltantes que se demandan como no cotizados, corresponden al año 1983, fecha para la cual no existía la creación del grupo empresarial, figura comercial que es distinta a la unidad de empresa y que solo se dio en el año 1996, por lo que para el año 1983 TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA. era una sociedad, e INTEGRAL S.A., otra.

En este orden de ideas, señala que no existen sucesores procesales de una sociedad liquidada, porque no es factible revivir lo que ya está muerto, que también está el hecho de que este proceso no es dable declarar una unidad de empresa, porque no se aplica correctamente el precedente jurisprudencial, siendo el fallo extenso pero sin fundamento normativo plausible para el caso.

Finalmente, dice que en este caso es claro que el Despacho reconoce el contrato laboral entre el demandante y TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA., declaratoria que no apela, así como tampoco el hecho que dicha empresa se encuentre liquidada, y que no se haya hecho reclamación alguna a la misma por parte del actor antes de su liquidación, solicita que con base en estos parámetros que no son motivo de controversia, se confirme su declaratoria, ya que lo que apela es los fundamentos que llevaron al despacho a declarar la solidaridad de las sociedades INTEGRAL S.A. e INTEGRAL INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN S.A.S., con una empresa como TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA. que se encuentra liquidada

desde el año 2015, así como los elementos que llevaron al Despacho a declarar la unidad de empresa, para generar una supuesta sucesión procesal, ya que considera que dichas declaratorias no tienen sustento normativo e incluso jurisprudencial y en consecuencia, tampoco hay lugar a condenar en costas a las accionadas.

#### **APELACIÓN DE COLPENSIONES.**

La apoderada de COLPENSIONES solicita la revocatoria de la sentencia porque considera que es un tercero ajeno a ese negocio jurídico, y no puede verse perjudicada por el error en el cual incurrieron las sociedades accionadas al no pagar al accionado las prestaciones sociales cumplidamente al demandante.

Frente a la condena impuesta de reconocer al accionante la pensión de vejez, dice que en su caso se verificaron los requisitos para acceder a la prestación, encontrando que si bien al 1 de abril de 1994 contaba con 45 años de edad, siendo beneficiario del régimen de transición hasta el 31 de julio de 2010, en concordancia con el Acto Legislativo 01 de 2005, no puede extenderse después del 31 de julio de 2010, excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, tuvieran cotizadas 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el 31 de diciembre de 2014, por lo que en el caso del actor, éste solo contaba con un total de 724.32 semanas de cotización, de manera que solo fue beneficiario de la transición hasta el 31 de julio de 2010, pero si bien tenía la edad para pensionarse a la citada fecha, no constaba con 500 semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, esto es, entre el 4 de agosto de 2008 al 4 de agosto de 1988, porque solo acredita 477.51 semanas, y frente a las 1000 semanas en cualquier tiempo, contaba con 554.41 semanas, concluyéndose de esta manera, que no es posible el reconocimiento de la pensión de vejez, bajo la luz del Decreto 758 de 1990.

#### **4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:**

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, los apoderados judiciales del DEMANDANTE y la codemandada INTEGRAL INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN S.A.S., presentaron escritos de alegatos anotando resumidamente lo siguiente:

## **ALEGATOS DEL DEMANDANTE.**

El demandante prestó servicio a Integral Ingeniería y Supervisión S.A.S. y recibía órdenes directas de la sociedad matriz Integral S.A.S., la cual es solidariamente responsable por los hechos que derivarían de su liquidación, conforme a lo establecido por la Corte Suprema. Sala de Casación Laboral. Radicación No. 71645 (SL3493-2020) 15 de septiembre de 2020. Magistrado ponente: Martín Emilio Beltrán Quintero, señala la responsabilidad que tienen estas de manera subsidiaria.

Que la realidad era que de quien recibía órdenes era de la sociedad Integral S.A.S., y por tanto se deberá dar aplicación a lo señalado como contrato realidad, si no se considera la responsabilidad de la matriz en el presente caso (artículo 53 C.N.)

Que el artículo 48 de la C.N. señala como derecho fundamental de todo ciudadano la seguridad social, y como tal, sustraer de esta obligación al empleador omiso conllevaría a la pérdida del derecho a la pensión, inicialmente la de vejez y posteriormente a la de sobrevivencia.

Que existe jurisprudencia pacífica de la Honorable Corte Suprema de Justicia, sala de casación laboral que señala que los empleadores, aun en zonas de no cobertura se encuentran obligados a pagar los aportes a la seguridad social a través de un título pensional representado en un cálculo actuarial, equiparando está a omisión de afiliación.

Que en cabeza del señor Jorge Enrique Ríos Sarria (Q.E.P.D.) se reunían los requisitos mínimos para el otorgamiento de la pensión de vejez, el cual deberá ser sustituida por una pensión de sobrevivencia, en razón del deceso de este y como tal, solicito sea confirmada la decisión proferida por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Medellín.

## **ALEGATOS INTEGRAL INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN S.A.S.**

El señor JORGE ENRIQUE RÍOS presto servicios para la empresa TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA., por períodos no consecutivos en el lapso comprendido entre 1978 y 1984, contrario a lo señalado durante el proceso, el certificado aportado no constituye a INTEGRAL S.A. como verdadero empleador, pues claramente se indica que para los períodos de tiempo comprendidos entre el 24 de abril y el 22 de octubre de 1978, 01 de diciembre de 1978 y el 30 de octubre de 1980 y del 12 de

agosto de 1981 hasta el 12 de agosto de 1984, el empleador fue TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA.

En concordancia con lo indicado por el despacho, invocando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la recurrida providencia, al documento debe otorgarse la seriedad propia de una certificación, sin embargo, el fallador incurrió en una incorrecta valoración de la prueba, pues de forma inequívoca se indica la vinculación laboral del trabajador con la empresa TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA.

Adicionalmente, no es dable afirmar que INTEGRAL S.A. fuera verdadero empleador del demandante, o en términos de su apoderado, existiera un contrato realidad, pues si bien en las obras se presentaba personal de INTEGRAL S.A., es propio de la actividad de construcción la presencia de pluralidad de empresas y la emisión de ordenes o instrucciones por parte de los ingenieros, en el mismo sentido, el acervo probatorio no es concluyente al respecto, pues al tratarse de actividades transversales, las instrucciones y directrices no se constituyen en una subordinación a la empresa empleadora del profesional que las imparte.

La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre este tema en providencias como la emitida por la Sala de Casación Laboral:

*“El grado de subordinación varía según la naturaleza de la labor que desempeñe el trabajador, así por ejemplo en el desempeño de labores técnicas o científicas el grado de subordinación es casi imperceptible, y lo mismo puede decirse de los trabajadores calificados. En cambio, en los que no lo son, la subordinación es más acentuada, más ostensible y directa”*

Argumento que entendido en el contexto del cargo desempeñado por el demandante y en concordancia con lo manifestado en la sentencia con radicado No. 16062 del 2001, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia:

*“Es que definitivamente la vigilancia, el control y la supervisión que el contratante de un convenio comercial o civil realiza sobre la ejecución y las obligaciones derivadas del mismo, en ningún caso es equiparable a los conceptos de subordinación y dependencia propios de la relación de trabajo, pues estas últimas tienen un naturaleza distinta a aquellos; en todo caso, las instituciones específicas hay que valorarlas dentro del entorno de la relación y no descontextualizadamente como lo intenta el censor, pues son precisamente esas circunstancias peculiares las que en determinado momento permiten colegir si las ordenes o instrucciones emitidas corresponden a un tipo de contrato u otro”*

El Juez de conocimiento desconoció el elemento disciplinario que debe contener la subordinación para determinar un contrato realidad, pues el mero acto de impartir una orden, si no viene acompañado de la facultad de exigir su cumplimiento o sancionar su omisión, no es por si misma la subordinación característica de un contrato laboral.

Ahora bien, respecto de la responsabilidad subsidiaria de INTEGRAL S.A., es improcedente su aplicación por las razones que procedo a exponer: inicialmente, refiriendo a las motivaciones de la sentencia condenatoria, en el presente proceso no se configuran una sucesión procesal, pues el artículo 68 del Código General del Proceso **expresamente** indica que la extinción, para el caso concreto, debe suceder en el desarrollo de la acción, así:

***“ARTICULO 68. SUCESIÓN PROCESAL: (...) Si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso la sentencia producirá efectos respecto de ellos, aunque no concurren.”***

Adicionalmente, el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre la procedibilidad de la figura de sucesión procesal, indicando que no es suficiente la manifestación de las partes, pues se requiere de la titularidad de la obligación o, en otros términos, la legitimación en la causa de quien se vinculara como acreedor:

*“Ahora, si bien la sucesión procesal opera de pleno derecho, precisamente, por la ocurrencia de una circunstancia fáctica que tiene plenos efectos dentro del proceso, lo cierto es que para su declaración judicial se requiere contar con los elementos de convicción necesarios a la hora de reconocer el carácter de sucesor. En otros términos, no basta la manifestación de una persona o sujeto de derechos a la hora de reclamar su participación dentro del proceso en calidad de sucesor, si la misma no acredita con suficiencia esa específica condición, es decir, de ser el nuevo titular del interés legítimo o del derecho debatido que se encontraba en cabeza de la persona jurídica, demandante o demandada, que estaba vinculada al proceso.”*

*(Consejo de Estado, Sección Tercera, Radicado No. 13001-23-31-000-2004-0246301(37352))*

En segundo lugar, se exponen entonces las razones por las cuales INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S no está llamada a responder por las obligaciones de la extinta TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA., contrario a la realidad fáctica probada acerca de la liquidación de la sociedad en el año 2015, como se puede constatar en el certificado especial expedido por la Cámara de Comercio de Medellín, aportado al expediente, mediante extracto de Acta No. 53 del

2023 de febrero de 2015 de la Junta de Socios de TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA. Se aprobó la liquidación de la sociedad.

A propósito de esta liquidación, es necesario aclarar la situación del Grupo Empresarial y las fechas en que se realizó cada actuación, esto es, al momento de la cancelación del registro de TOPOGRAFÍA A Y TRAZADOS LTDA., en el año 2015, el único integrante de la junta de socios era la empresa INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S, en razón de esta calidad se debe tener en cuenta el régimen establecido en la legislación comercial para este tipo societario, dispuesto por el artículo 353 del Código de Comercio, así como lo preceptuado en el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo:

*Del Código de Comercio:*

*ARTÍCULO 353. RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS EN LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. En las compañías de responsabilidad limitada los socios responderán hasta el monto de sus aportes.*

*Del Código Sustantivo del Trabajo:*

*ARTICULO 36. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Son solidariamente responsables de todas de las obligaciones que emanen del contrato de trabajo las sociedades de personas y sus miembros y éstos entre sí en relación con el objeto social y sólo hasta el límite de responsabilidad de cada socio, y los condueños o comuneros de una misma empresa entre sí, mientras permanezcan en indivisión*

Una vez liquidada la sociedad desaparece del mundo jurídico y no puede ser titular de derechos ni obligaciones, al respecto el Consejo de Estado manifestó en sentencia 2010-00343 de 04 de abril de 2019, Rad. 76001-23-31-000-2010-00343-01 (24006).

*“Surtido el trámite de la liquidación, la personalidad jurídica de las sociedades se extingue con la inscripción de la cuenta final de la liquidación. A ese aspecto se refirió el Oficio 220-036327, del 21 de mayo de 2008, de la Superintendencia de Sociedades, en el cual se señaló que la inscripción de la cuenta final de la liquidación en el registro mercantil implica la desaparición de la sociedad y de sus órganos del mundo jurídico, por lo cual la entidad ya no existe en el «tráfico mercantil como persona jurídica, en consecuencia, no puede de ninguna manera seguir actuando, ejerciendo derechos y adquiriendo obligaciones»; análisis que es concidente con la jurisprudencia de la esta Sección, que señaló en la sentencia del 7 de marzo de 2018 (exp. 23128, C.P. Stella Jeannette Carvajal):*

*... la capacidad para actuar se extingue con la inscripción de la cuenta final de la liquidación en el registro mercantil y, a partir de ese momento, las personas jurídicas desaparecen del mundo jurídico, no pueden ser sujeto de derechos y obligaciones, y no pueden ser parte de un proceso.”*

No obstante, el Despacho declaro la unidad de empresa contenida en el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo respecto de INTEGRAL S.A. como controlante de INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S., sin embargo, esta última no era controlante si no socia de la empleadora del demandante, por lo que no es dable predicar la unidad de empresa, desconociendo los requisitos establecidos en la jurisprudencia relacionada.

Incurre entonces el fallador en una aplicación errónea de la legislación, pues se prueba con los certificados de Existencia y Representación que no existe unidad de empresa pues TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA., en ningún momento perteneció al Grupo Empresarial de INTEGRAL S.A., adicionalmente, para esta declaración debe considerarse el predominio económico de la principal sobre las filiales: (Corte Suprema de Justicia SL6228-2016 Radicación n.º 43680)

*Así las cosas, en los términos del art. 194 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el art. 32 de la L. 50 de 1990, cuando la declaratoria de unidad de empresa recae sobre personas jurídicas, no basta la existencia de una unidad de explotación económica, y la ejecución de actividades similares, conexas, o complementarias, sino que también se requiere contar con la prueba del predominio económico de la sociedad principal sobre las filiales o subsidiarias, para el caso a través de las personas jurídicas y no por medio de sus socios individualmente considerados.*

En este sentido, INTEGRAL S.A. no ejerció un predominio económico que facultara la unidad de empresa, predicable exclusivamente de la calidad de socio de su filial INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S., en este orden de ideas, aclara el Consejo de Estado en la citada providencia:

*“En este orden de ideas, no siempre que se esté en presencia de un grupo empresarial conformado por una sociedad principal o matriz y varias subordinadas, necesariamente hay unidad de empresa, ya que se hace indispensable verificar en todos los casos el factor del predominio económico o relación de dependencia económica que exige el mandato laboral, que lo comprende tanto la participación accionaria como el control financiero y administrativo entre las sociedades, común y recíproco, que lleve a inferir que las subsidiarias se encuentren directamente sometidas a la controlante”*

Finalmente, la responsabilidad subsidiaria invocada por el apoderado del demandante mediante sentencia SL3493 de 2020, no es procedente por ser aplicable para los procesos regulados por el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, es decir procesos concursales, no obstante, en caso de aplicarse la Corte Suprema de

Justicia mediante sentencia SC2837-2018 (05001) del 25 de julio de 2018 con ponencia de la magistrada Margarita Cabello Blanco, determino que esta responsabilidad estaba supeditada a la reclamación previa del afectado, ante la sociedad principal, requerimiento que no se realizó previa liquidación de la sociedad TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA.”

Por lo anterior, respetuosamente solicito al Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral, se revoque la sentencia de primera instancia, y en consecuencia, se absuelva a mi representada de las obligaciones declaradas en la providencia, por no existir fundamento jurídico para el pago de las sumas de dinero pretendidas.

## **5. PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER:**

Dado el alcance de las impugnaciones presentadas por las codemandadas, el problema jurídico para resolver se circunscribe a establecer si es viable declarar la unidad de empresa, y si en esa medida, INTEGRAL S.A. e INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S., son solidariamente responsables de las obligaciones de la extinta sociedad TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA, respecto del título pensional que se ordenó pagar a COLPENSIONES, por los periodos laborados por el demandante entre el 24 de abril de 1978 al 22 de octubre de 1978, entre el 1 de diciembre de 1978 al 30 de octubre de 1980 y entre el 12 de agosto de 1981 al 17 de octubre de 1984.

De otro lado, se analizará si resulta viable la condena al pago de la pensión de vejez impuesta a COLPENSIONES a favor del demandante, como beneficiario del régimen de transición, en aplicación del Decreto 758 de 1990.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta corporación judicial para conocer de la apelación y consulta de la sentencia, conforme lo dispuesto en los artículos 10 y 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

## **6. CONSIDERACIONES:**

La decisión del recurso de apelación presentado por las codemandadas INTEGRAL INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN S.A.S. y INTEGRAL S.A., se proferirá atendiendo lo

dispuesto en el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, referente al principio de consonancia, en virtud del cual la actividad de la segunda instancia se restringe a los puntos concretos de inconformidad al sustentarse el referido recurso, sin embargo, no se puede olvidar que de conformidad con lo dispuesto el art. 14 de la Ley 1149 de 2007 además de resolverse la apelación de las partes, se consultará la sentencia en favor de COLPENSIONES por haberle resultado adversa, por lo que la legalidad del fallo será estudiada en su integridad en lo que desfavorezca a COLPENSIONES.

Antes de abordar el problema jurídico planteado en esta instancia, es procedente aclarar la siguiente situación.

La parte accionante en las pretensiones de la demanda, solicita que se condene a las codemandadas INTEGRAL INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN S.A.S. como única socia de la sociedad TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA. y/o la sociedad INTEGRAL S.A. como controlante de la primera, de manera conjunta, solidaria o separada, para que procedan a cancelar y trasladar a COLPENSIONES, el valor correspondiente a la reserva actuarial o proceda a constituir el título pensional respectivo, por el tiempo laborado por el demandante, entre los periodos del 24 de abril de 1978 y el 22 de octubre de 1978, y del 01 de diciembre de 1978 al 30 de octubre de 1980.

Para tal efecto, expone el actor de manera confusa en los hechos de la demanda, que la sociedad INTEGRAL S.A., certificó que laboró con la empresa TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA., entre abril de 1978 y marzo de 1984 de forma interrumpida, y también señala que siempre recibió órdenes de la sociedad INTEGRAL S.A., salario y que las demás obligaciones laborales estaban a cargo de esta sociedad.

Nótese entonces como en las pretensiones de la demanda, no pretende el actor que se declare la existencia de un contrato realidad con INTEGRAL S.A., sino que solicita se condene a las codemandadas de forma solidaria al pago de los aportes pensionales dejados de cancelar.

Ahora, el juez de instancia en sentencia proferida el 16 de septiembre de 2021, no analizó si se presentaba el denominado contrato realidad entre el demandante y la sociedad INTEGRAL S.A., sino que partió de la base que el demandante había laborado con TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA., entre abril de 1978 a marzo de

1984 de forma interrumpida, y que por tal razón, debían ser condenadas las codemandadas INTEGRAL INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN S.A.S. e INTEGRAL S.A. al pago del cálculo actuarial, por considerar que se trataba de un grupo empresarial y para garantizar los derechos fundamentales del accionante, declaró la unidad de empresa.

Esta decisión solo fue recurrida por las entidades demandadas, no por el accionante, quien mostró conformidad con el fallo proferido, no obstante, en los alegatos de conclusión, solicita la parte actora que se confirme íntegramente el fallo proferido, pero más adelante expone que la sociedad INTEGRAL S.A. fue su verdadero empleador y que por ello se debe dar aplicación a la teoría del contrato realidad, si no se considera la responsabilidad de la matriz en el presente caso, lo que resulta contradictorio, pues no se puede pretender al mismo tiempo que se confirme íntegramente la sentencia, si más adelante solicita que se declare la existencia de un contrato realidad con la sociedad INTEGRAL S.A., pues eso significaría ni más, ni menos, la modificación de la sentencia de primera instancia.

Pese a lo señalado, lo que debe la Sala poner de presente, es que la parte accionante no recurrió la sentencia dictada por el Juez de instancia, de manera que si no se encontraba conforme con la forma en como el *a quo* resolvió las pretensiones de la demanda, debió manifestar su inconformidad y presentar el recurso de alzada, por lo que no puede convertir los alegatos de conclusión, en una oportunidad más para buscar la reforma de la sentencia, ya que como se indicó anteriormente, el estudio de la sentencia de segunda instancia se debe limitar a los puntos concretos de inconformidad.

Dicho lo anterior, se pasan a resolver los problemas jurídicos planteados en esta instancia.

Frente al tema objeto de fijación del litigio, si bien el juez de instancia al proferir su decisión, puso de presente la temática relativa a la declaratoria de unidad de empresa, la cual no fue planteada como un hecho en la demanda, así como tampoco como una pretensión del accionante, lo cierto es que el juez laboral posee poderes para fallar extra y ultra petita, siempre y cuando lo decidido esté en consonancia con los hechos y la pretensiones de la demanda, por lo que la Sala considera que en este caso, como lo indicó el juez, el tema de unidad de empresa guarda relación con los hechos planteados en la demanda, pues en ellos se hace

mención a que la sociedad INTEGRAL S.A., controla a la sociedad INTEGRAL INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN S.A.S., quien era la única socia de TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA., en razón de ser la casa matriz.

En este sentido, dispone el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo lo siguiente:

ARTICULO 194. DEFINICIÓN DE EMPRESAS. Artículo modificado por el artículo 32 de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:

1. Se entiende como una sola empresa, toda unidad de explotación económica o las varias unidades dependientes económicamente de una misma persona natural o jurídica, que correspondan a actividades similares, conexas o complementarias y que tengan trabajadores a su servicio.
2. En el caso de las personas jurídicas existirá unidad de empresa entre la principal y las filiales o subsidiarias en que aquella predomine económicamente, cuando, además, todas cumplan actividades similares, conexas o complementarias; pero los salarios y prestaciones extralegales que rijan en la principal al momento de declararse la unidad de empresa solamente se aplicarán en las filiales o subsidiarias cuando así lo estipule la respectiva convención colectiva de trabajo, o cuando la filial o subsidiaria esté localizada en una zona de condiciones económicas similares a las de la principal, a juicio del Ministerio o del juez del trabajo.
3. No obstante lo anterior, cuando una empresa establezca una nueva unidad de producción, planta o factoría para desarrollar actividades similares, conexas o complementarias del objeto social de las mismas, en función de fines tales como la descentralización industrial, las explotaciones, el interés social o la rehabilitación de una región deprimida, sólo podrá declararse la unidad de empresa entre aquellas y estas después de un plazo de gracia de diez (10) años de funcionamiento de las mismas. Para gozar de este beneficio el empleador requiere concepto previo y favorable del Ministerio de Desarrollo Económico.
4. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de oficio o a solicitud de parte y previa investigación administrativa del caso, podrá declarar la unidad de empresa de que trata el presente artículo, para lograr el cumplimiento de las leyes sociales. También podrá ser declarada judicialmente.

El tema de la unidad de empresa ha sido abordado en varias oportunidades por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero especialmente en sentencia SL15966-2016, en la que se señaló lo siguiente:

“Tratándose de la existencia de varias personas jurídicas, como ocurre en el sub lite, para que se configure la denominada unidad de empresa, **deben concurrir la existencia de una principal o matriz y otra subordinada que se denomina filial o subsidiaria. Ahora bien, esa dependencia se presenta solo cuando la primera de ellas ejerce un predominio económico sobre la segunda, por lo que, precisamente, es este elemento el que debe verificarse, a efectos de declarar**

**la existencia de dicha figura**, tal como lo ha sostenido esta Sala, entre otras, en las providencias CSJ SL6228-2016 y CSJ SL6313-2016.” (Subrayado agregado)

Así las cosas, vista la prueba documental, se observa el certificado de existencia y representación legal de INTEGRAL S.A., el cual reposa entre folios 69 a 85 del archivo N°3 del expediente digital de primera instancia, del que se desprende que existe un Grupo Empresarial que se conformó el 06 de agosto de 1996 constituido por INTEGRAL S.A. como empresa matriz, y las sociedades que controla directamente tales como INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S., de quien se dice es subordinada y posee el 100% de su capital, y las sociedades I-DOS S.A.S. e INTEGRAL DISEÑOS E INTERVENTORÍA S.A.S. que son filiales y posee el 100% de su capital, la sociedad SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL S.A.S., controlando además indirectamente a SERVICIOS DE INGENIERÍA SERVING LTDA. EN LIQUIDACIÓN como empresa subsidiaria.

También reposa el certificado de existencia y representación legal de INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S., que da cuenta que hace parte del grupo empresarial ya mencionado, documental que reposa entre folios 86 a 97 del archivo N°3 del expediente digital de primera instancia.

Ahora, en palabras de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para que se declare la unidad de empresa, se debe demostrar que existe una empresa principal o matriz, que en este caso sería INTEGRAL S.A. y otras denominadas filial o subsidiarias, tal y como ocurre con las empresas INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S., I-DOS S.A.S., INTEGRAL DISEÑOS E INTERVENTORÍA S.A.S., SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL S.A.S. y SERVICIOS DE INGENIERÍA SERVING LTDA. EN LIQUIDACIÓN, pero además, se debe demostrar el predominio económico de la primera (INTEGRAL S.A.), respecto de las demás sociedades o empresas, y en este punto es importante destacar que el certificado de existencia y representación legal de INTEGRAL S.A., al que se ha venido haciendo referencia, señala que todas las empresas filiales, subordinadas o subsidiarias, el 100% de su capital, es propiedad de INTEGRAL S.A., así lo definen conforme al artículo 261, numeral 1 del Código de Comercio, norma que dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 261. <PRESUNCIONES DE SUBORDINACIÓN>. <Artículo subrogado por el artículo 27 de la Ley 222 de 1995. El nuevo texto es el siguiente:> Será

subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos:

1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.”

Así las cosas, queda en evidencia que existe un control económico y financiero por parte de la sociedad matriz INTEGRAL S.A., respecto de la codemandada INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S., por lo que se presenta un efecto vinculante en los términos dispuestos en la norma laboral, al haber prueba del predominio económico de la sociedad principal sobre las filiales o subsidiarias, además, todas las empresas ejercen actividades similares, conexas, o complementarias.

Adicional a lo anterior, al proceso también fue aportado el certificado de Cámara de Comercio de la sociedad TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA., el cual reposa entre folios 175 y 176 del archivo N°3 del expediente digital de primera instancia, que da cuenta que la matrícula mercantil de la sociedad en cuestión se canceló el 23 de diciembre de 2015, momento para el cual figuraba como socio de dicha empresa la sociedad INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S., ya que así se estipuló por escritura pública N°14779 del 29 de diciembre de 2005 (Ver folio 84 del archivo N°3 del expediente digital de primera instancia).

De igual forma, se aprecia de la documental obrante entre folios 193 a 200 del archivo N°3 del expediente digital de primera instancia, el acta de *“Reunión ordinaria de la Junta General de socios de TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA EN LIQUIDACIÓN”*, que data del 23 de febrero de 2015 y que da cuenta que a la misma asistieron CARLOS ANDRÉS LADINO CORTISSOZ como Representante Legal de la sociedad INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S. y poseedor del 100% de las cuotas sociales de la empresa TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA EN LIQUIDACIÓN, la contadora LUZ MARYORY GÓMEZ POSADA como revisora fiscal, la abogada BEATRIZ EUGENIA FERNÁNDEZ RESTREPO como la secretaria general del grupo empresarial y como invitados los señores JAIRO HOYOS GÓMEZ como representante legal de INTEGRAL S.A., matriz de la sociedad y CLARA EUGENIA ESCORCIA ARAMBURO, como gerente financiera de INTEGRAL S.A. y su grupo empresarial.

En dicha reunión se dio por liquidada la sociedad TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA., pero, además, se adujo que INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S., como propietario único de TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA., **asumía el total de activos y pasivos descritos en los estados financieros, de tal forma que asume en su totalidad los compromisos pendientes de la sociedad en liquidación.**

Nótese entonces como se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo, en el sentido que existe una unidad de empresa porque toda las sociedades o empresas antes citadas, se presenta un control financiero y dependen directa o indirectamente de la sociedad matriz INTEGRAL S.A.S., situación que igualmente se presenta con la empresa TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA., quien si bien ya se encuentra liquidada, la entidad socia y propietaria era INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S., quien a su vez depende como subordinada de la empresa que posee el 100% de su capital, esto es INTEGRAL S.A.S.

Ahora, el hecho que TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA. se encuentre actualmente liquidada, no significa que las obligaciones que hayan quedado pendientes desaparezcan del mundo jurídico, máxime cuando la sociedad INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S., según el acta de “Reunión ordinaria de la Junta General de socios de TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA EN LIQUIDACIÓN”, se hizo cargo de los compromisos pendientes de la empresa liquidada.

En este aspecto, es importante traer a colación lo dicho por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL3248 de 2020, en la que indicó:

“Por la misma vía, enfatizando el carácter mencionado anteriormente y destacando uno de los principales efectos que tiene la existencia del grupo o conglomerado societario, que es la responsabilidad subsidiaria de la sociedad matriz o controlante a que se refería el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995 (hoy art. 61 de la Ley 1116 de 2006), la Sala de Casación Civil de la Corte expresó en sentencia CSJ SC2837-2018, 25 jul. 2018, rad. 05001 31 03 013 2001 00115 01:

*Como es notorio, nuestro ordenamiento contempla variadas soluciones que comprenden el descubrimiento del real o verdadero beneficiario de la operación o negocio, la procedencia de acciones indemnizatorias así como la responsabilidad subsidiaria a que se refiere el*

*parágrafo del artículo 148 de la mencionada ley 222, que en los diversos cargos se estima violado por el Tribunal.*

*Dicho precepto consagra esa particular responsabilidad vicaria en cabeza de la matriz o controlante por las obligaciones de la subordinada sometida a liquidación obligatoria o concordato cuando esas situaciones fueron el producto de las actuaciones de la primera, en razón de la subordinación y en interés de ésta o de cualquiera de sus subordinadas y en contra del beneficio de la sociedad en concordato o liquidación obligatoria.*

*Presume la ley que a esa situación concursal llegó la subordinada por las actuaciones de la matriz derivadas del control que sobre ella ejerce, pues la subordinación aparea que el poder de decisión de la filial o subsidiaria se encuentre sometido a la voluntad de la matriz, en los términos y posibilidades establecidos en los artículos 26 a 28 de la ley 222 de 1995.*

*En esa medida, se espera que además de advertir y enfrentar con decisiones y acciones los factores exógenos que inciden positiva o negativamente en el desenlace de la empresa, en el que el riesgo está siempre más o menos latente, los órganos de dirección y apoyo administrativo, como la junta directiva, y los administradores -a fin de cuentas designados por las personas naturales o jurídicas controlantes- den cuenta de los resultados de su actuar diligente.*

*Por eso, sin perjuicio de la lícita propensión a proteger las matrices sus propios intereses como socios o accionistas que pueden ser directa o indirectamente de la controlada, por el hecho de poder actuar e imponer sus decisiones -que adoptan los órganos colegiados o directamente comunican a los administradores- advierte el legislador que si van en contra de los intereses de la sociedad y privilegian los de ella o sus subordinadas, **responden de las obligaciones de la controlada en liquidación, en forma subsidiaria y por lo pronto presunta, y no porque su actuar en sí mismo pueda tildarse de ilícito, o porque en ese direccionamiento de la voluntad de la filial o subsidiaria concursada hubiesen cometido culpa.** Tan solo toma en cuenta la ley el juego de intereses en donde los de la sociedad no fueron los escogidos y más bien se actuó en su contra.*

En tanto que el citado art. 194 CST, específico para efectos laborales, dispone: la definición de empresa, los requisitos para el reconocimiento de la unidad de empresa entre principal, filiales o subsidiarias y señala, en su numeral 4, la inexorable necesidad de que tal declaración sea proferida por el Ministerio de Trabajo o también que lo sea por vía judicial.”

(Subrayado fuera de texto)

Corolario de lo indicado, resulta procedente por esta vía la declaratoria de la unidad de empresa tal y como fue indicado por el juez de instancia, máxime si se tiene en cuenta que lo que se busca con dicha declaratoria es garantizar el derecho a la seguridad social del demandante fallecido y sus posibles beneficiarios, pues así lo ha dicho también la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que

en casos similares en los que se declara la unidad de empresa, han indicado que lo que se pretende es *“impedir el desmejoramiento de la situación del trabajador provocado por la fragmentación del capital o del tiempo necesario para obtener algunas prestaciones establecidas en la ley o en las convenciones colectivas”*. (Ver sentencia de 21 de abril de 1994, radicación No. 6047, concordada con sentencia CSJ SL, 16 dic. 2009, rad. 32212).

Por lo anterior, el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de las sociedades demandadas que buscaba la revocatoria de la declaración de unidad de empresa, no prospera y por ende en ese sentido, será CONFIRMADA la sentencia.

Ahora, en lo que tiene que ver con la procedencia de tener o no en cuenta las cotizaciones al sistema pensional, en razón a la relación laboral que tuvo el demandante fallecido con la empresa TOPOGRAFÍA Y TRAZADOS LTDA., entre el 24 de abril de 1978 al 22 de octubre de 1978, entre el 1 de diciembre de 1978 al 30 de octubre de 1980 y entre el 12 de agosto de 1981 al 17 de octubre de 1984, la que fue aceptada por las sociedades demandadas en la contestación de la demanda, sin que exista discusión frente a este aspecto, se tiene lo siguiente.

La jurisprudencia de todas las altas cortes de nuestro país, es decir la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral y el Consejo de Estado, tienen establecido una clara y definida línea jurisprudencial según la cual, ante la falta de afiliación de un trabajador al sistema pensional por parte del empleador, bien sea por imposibilidad de hacerlo, por falta de cobertura del ISS o por cualquiera otra razón, es obligación del empleador, pagar los aportes pensionales que no canceló, por el procedimiento del cálculo actuarial.

La línea jurisprudencial antes mencionada ha sido construida inicialmente por la Corte Constitucional mediante en las sentencias T-719 de 2011, T-020 de 2012, T-651 y 770 de 2013 y T- 435 de 2014, T- 665 de 2015, T – 64 de 2018, SU- 226 de 2019, entre otras.

En la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, la tesis antes mencionada del deber de los empleadores de responder por las cotizaciones o aportes pensionales aún en los casos que no había cobertura del ISS o no había la obligación legal de cotizar, fue asumida en un principio con restricciones, pero posteriormente con más amplitud en la sentencia 32922 de 22 de julio de 2009 y la

sentencia 35692 de 24 de enero de 2012, y sin restricciones de ninguna clase a partir de la Sentencia SL9856-2014, ratificada en las sentencias SL 18906-2017, SL3524-2018, SL4334-2019 entre muchas otras.

El Consejo de Estado también ha sostenido la tesis ya referida, entre otras en las sentencias 2006-02298 de octubre 24 de 2012, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN "A", en la Sentencia 2006-00068 de marzo 11 de 2010, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, y en la Sentencia 2016-05641 de julio 19 de 2017, SECCIÓN CUARTA., entre otras.

Y es que como se ha explicado en las referidas sentencias, sobre todo las de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, no es que al empleador que no tuvo la obligación de afiliar a sus trabajadores al ISS por falta de cobertura, se le esté imponiendo una carga económica que legalmente no tenía, pues antes de la obligación de los empleadores de afiliar a sus trabajadores al ISS, tenían a cargo el reconocimiento de la pensión a favor de estos, por lo que en todo caso, tenían una carga económica, que incluso podía ser más onerosa que el solo pago de las cotizaciones al sistema seguridad social, y por ello es razonable la tesis jurisprudencial sostenida en el sentido, que si el trabajador no alcanzó a obtener la pensión a cargo del empleador, este tenga la carga de contribuir parcialmente con el financiamiento de la misma, por el tiempo que el trabajador estuvo a su cargo, con el pago de las cotizaciones por el procedimiento del cálculo actuarial como lo ha definido la jurisprudencia antes citada.

De otra parte, este cálculo actuarial, es imprescriptible, toda vez que forma parte del capital indispensable para el reconocimiento de la pensión que es de carácter vitalicia. (Sentencia SL2353-2020. Radicación n.º 46729. Acta 24. 8 de julio de 2020).

Las razones expuestas en precedencia, nos llevan CONFIRMAR la sentencia de primera instancia en cuanto condenó a las sociedades demandadas INTEGRAL S.A. e INTEGRAL INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN S.A.S., a pagar las cotizaciones a favor del actor mediante el aludido cálculo actuarial, condena que se impone de manera solidaria a las sociedades accionadas, ya que *“el efecto jurídico de la declaratoria de unidad empresarial, es tener a las varias personas jurídicas, o las varias unidades de una misma persona natural o jurídica, como una sola empresa,*

*en beneficio del trabajador, con miras a que éste pueda obtener el reconocimiento y pago de acreencias laborales que están a cargo de la empresa. Es por ello, que cuando concurre el citado elemento del predominio o dependencia económica, es dable entrar a declarar administrativa o judicialmente la unidad de empresa, siendo una de las consecuencias jurídicas propias de esta figura, que se haga derivar responsabilidad laboral de dichas sociedades sobre las acreencias reconocidas o a reconocer a los trabajadores". (Ver sentencia SL6228 del 11 de mayo de 2016, M.P. Dr. GERARDO BOTERO ZULUAGA).*

Ahora, respecto del derecho que tenga el demandante fallecido a la **pensión de vejez** que se condenó a pagar a COLPENSIONES, es necesario tener en cuenta, que la Ley 100 de 1993, dispuso en su Art. 36, un régimen de transición para las pensiones de vejez, en virtud del cual las personas que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (1º de abril de 1994), contaran con 40 años de edad si eran hombres o 35 si eran mujeres o 15 años de cotizaciones, tienen derecho a pensionarse bajo las disposiciones del régimen pensional al que se encontraban afiliados.

En el caso de los afiliados al I.S.S., el régimen pensional de vejez anterior a la vigencia de la ley 100 de 1993, es el que regula el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, y el de los empleados del sector público podía ser la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de 1988.

Con la copia de la cédula de ciudadanía del actor que obra a folio 16 del archivo N°3 del expediente digital de primera instancia, queda probado que nació el 04 de agosto de 1948, por lo que al 1º de abril de 1994, fecha en que entró a regir el sistema pensional de la Ley 100 de 1993, contaba con 46 años de edad, de lo que se viene que sea beneficiario del régimen de transición al que se encontraba afiliado con anterioridad a la expedición de la citada Ley, y como quiera que el accionante antes de la vigencia de aquella Ley se encontraba afiliado al ISS, pues registra cotizaciones desde febrero de 1970, como se prueba con la historia laboral tipo Can y con el reporte de semanas cotizadas del actor más actualizado obrante a folios 135 a 143 del archivo N°3 del expediente digital de primera instancia, documentos aportados por COLPENSIONES, se concluye que el demandante es beneficiario del régimen de transición de pensiones del ISS hoy COLPENSIONES, por lo que le es aplicable las preceptivas del Decreto 758 de 1990.

En ese orden de ideas, al demandante le es aplicable por transición el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, que otorga derecho a pensión de vejez, al afiliado o afiliada al régimen pensional del ISS, que tenga cotizadas 1000 semanas en cualquier tiempo o 500 en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para beneficiarse de la citada pensión, edad en el caso de los hombres es de 60 años.

A pesar de lo expresado en precedencia, impone recordar que el Acto Legislativo 01 de 2005, dispuso en su parágrafo transitorio 4to, que régimen de transición del Art. 36 de la Ley 100 de 1993, terminaba el 31 de julio de 2010, dejando a salvo a quienes estando en dicho régimen, tuvieran a la fecha de su vigencia (29 de Julio de 2005 conforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional), o al menos 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios, a los que se les extiende el régimen de transición hasta el año 2014.

En el caso del demandante, en su historia laboral registra **1.084.95** semanas cotizadas al ISS, a las que se suman las **239.57** semanas, que representan el cálculo actuarial que se le condenó a pagar a las demandadas INTEGRAL S.A. e INTEGRAL INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN S.A.S., para un total de **1.324.52 semanas** hasta el 31 de agosto de 2016, data en la que se registra la última cotización en la historia laboral, habiendo cumplido el actor la edad de 60 años, el 04 de agosto de 2008, pues nació este mismo día y mes del año 1948. Ahora, del total de semanas laboradas por el accionante, **847.02 semanas**, fueron cotizadas antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, lo que le permite continuar siendo beneficiario del régimen de transición hasta el 31 de diciembre de 2014.

Es de aclarar que si bien el juez de instancia indicó que el actor también contaba con 51.45 semanas con un empleador para el que laboró entre enero de 1967, al 20 de marzo de 1968, semanas que aparecen en una de las historias laborales allegadas por el actor, pero no en las historias laborales que fueron depuradas y aportadas por Colpensiones, lo cierto es que la Sala no tiene certeza que en efecto al accionante le pertenezca dicho periodo cotizado, toda vez que la historia laboral que reposa en folio 17 del archivo N°3 del expediente digital de primera instancia, señala que es un “REPORTE NO VÁLIDO PARA PRESTACIONES ECONÓMICAS” y que las semanas allí indicadas, están sujetas a verificación y corrección por parte

del ISS, de manera que al no haber aportado el actor prueba que demostrara que laboró entre los años 1967 a 1968, no pueden ser tenidas en cuenta.

Por lo dicho, la decisión del juez de primera instancia de reconocer y pagar la pensión a cargo de COLPENSIONES con base en Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, como beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1990, será CONFIRMADA, ya que, para el 31 de diciembre de 2014, el accionante contaba con la edad mínima para pensionarse y con **1.250 semanas**, mismas que resultan suficientes para acceder a la citada prestación.

Ahora, para analizar la partida inicial del derecho al disfrute de la pensión de vejez, es necesario tener en cuenta que la Ley 100 de 1993, consagra en el inciso 2º del artículo 31, que al Régimen de Prima Media con Prestación Definida le *“Serán aplicables las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en la citada ley.”*, de tal manera que como el derecho pensional del actor le fue reconocido conforme al régimen de prima media con prestación definida, le son aplicables las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte, a cargo de COLPENSIONES en lo que respecta a la causación y disfrute de la pensión, pues la citada Ley 100, no trajo disposición que regulara o modificara este aspecto y es de esta manera que el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, estipula literalmente que:

*“La pensión de vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior, pero será necesaria su desafiliación al régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma. Para su liquidación se tendrá en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada por este riesgo.”* (Subrayado agregado)

En lo atinente a la desafiliación del sistema pensional, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, ha precisado que ella en principio se materializa reportado la novedad del retiro pensional, pero que no es esta la única forma de dar a conocer la intención de desafiliación para entrar a disfrutar de la citada prestación, pues ella se puede deducir de varios hechos, como lo son, peticionar el reconociendo de la pensión y cesar el pago de los aportes pensionales cuando ya se han cumplido los requisitos legales para tal fin, no

obstante en el caso concreto, se acredita que el demandante realizó la última cotización al sistema para el ciclo de agosto de 2016, por lo que le asiste derecho al retroactivo pensional a partir del 01 de septiembre de 2016, tal y como fue reconocido por el *a quo*.

En lo referente a la excepción de prescripción, en este caso se fundamenta en los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, tenemos que el término prescriptivo comenzaría a correr una vez se causó el derecho a la pensión el 01 de septiembre de 2016, siendo la demanda presentada dentro de los 3 años siguientes, esto es el 12 de octubre de 2018, por lo que no transcurrió el término de los 3 años que estiman los artículos citados, no estando llamada a prosperar la excepción citada.

En relación con la cuantía de la pensión, nos remitimos al artículo 21 de la ley 100 de 1993, por lo que teniendo en cuenta la totalidad de las semanas cotizadas por el actor, le asiste derecho a que su pensión se calcule con el promedio de los salarios sobre los cuales ha cotizado durante toda la vida laboral o los últimos diez años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del IPC según certificación expedida por el DANE, esto es el que le resulte más favorable, teniendo en cuenta una tasa de reemplazo del 90% conforme al artículo 20 del Decreto 758 de 1990 por contar el demandante con más de 1250 semanas cotizadas.

Precisa la Sala que la obligación de COLPENSIONES de pagar la pensión al demandante, conforme al mandato del Inciso 2 del literal e) del Numeral 2 del Art. 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el Art. 9 de la Ley 797 de 2003, y el Art. 17 del Decreto 1414 de 1997 (compilado en el Art. Artículo 2.2.4.4.6., del Decreto 1833 de 2016, surge, cuando COLPENSIONES haya recibido efectivamente el cálculo actuarial, a su satisfacción, tal y como fue indicado por el *a quo*.

Se podrá hacer uso del proceso ejecutivo para lograr que INTEGRAL S.A., INTEGRAL INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN S.A.S., cancele a COLPENSIONES, el importe del cálculo actuarial, si no lo paga oportunamente.

En lo concerniente a la indexación de las mesadas pensionales de las que se condenó a pagar a COLPENSIONES, ella es procedente por razones de justicia y equidad, por cuanto con esta lo que se pretende es actualizar la depreciación monetaria causada por el retardado o inoportuno pago de las mesadas pensionales,

lo que es justo en una economía inflacionaria como la nuestra, por lo que en este sentido se CONFIRMARÁ la sentencia recurrida.

Se precisa, que la indexación de las mesadas pensionales retroactivas se realizará conforme la siguiente fórmula:

$$VA = Vh \times \frac{\text{IPC final}}{\text{IPC inicial}}$$

En la que VA (valor actualizado) es igual a la mesada pensional dejada de percibir por la demandante (Vh), multiplicada por el guarismo que resulta al dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en el mes anterior al pago, por el índice inicial, vigente en el mes de causación de cada mesada.

Respecto del porcentaje del descuento del aporte del demandante al sistema de salud, no se causa la indexación que se condena a pagar a su favor, pues tal porcentaje no es un derecho que les corresponda al actor, sino al sistema de salud y por ello no puede causar indexación a su favor, pues en todo caso, aunque se hubiera reconocido y pagado la pensión oportunamente el actor no habría recibido tal porcentaje, pues el mismo tenía como destino el sistema de salud.

Finalmente, se pone de presente que las mesadas pensionales causadas a favor del señor JORGE ENRIQUE RÍOS SARRIA hasta la fecha de su deceso, no son objeto de sustitución pensional, pues hacen parte de la masa sucesoral de bienes del causante, ello por cuanto estos dineros debieron entrar al patrimonio del demandante fallecido en el transcurso del proceso, por ser bienes que le pertenecieron, y en consecuencia se trata de un crédito de la sucesión por mesadas pensionales cuyo titular era el accionante.

La Corte Suprema de Justicia así lo explica en sentencia de 1º de agosto de 2001, radicación 15368, donde indica:

*“En efecto, fallecida una persona, los derechos y obligaciones cuya titularidad ostentaba entran a formar el estado de indivisión de la sucesión. Esta comunidad herencial es universal, está caracterizada por comprender cuanto por ley transmite el causante al morir, por activa y por pasiva.*

*Pero esta comunidad herencial carece por sí misma de capacidad de derecho, no actúa como persona, ni activa ni pasivamente, actúan son los titulares de derechos en ella, los sucesores a título universal, en virtud de la calidad que ostentan (Art.*

*1155 C. Civil). Por haber desaparecido el dueño o titular de ciertos derechos y obligaciones, están al frente de ellos sus herederos. Por ello, éstos en general, y cada heredero en particular comparecen al proceso para la sucesión, y si los bienes o derechos son objeto de litigio debe demandarse a todos los herederos conocidos, en cambio uno solo de ellos puede demandar, pero debe pedir para la sucesión".*

Conforme lo anterior, el retroactivo pensional reconocido tiene que hacer parte y ser pagados a favor de la masa sucesoral del causante fallecido, con el trámite de pago a herederos ante Colpensiones o en proceso sucesorio, y por ello la sentencia será adicionada en este aspecto.

Costas en esta instancia a favor del demandante y a cargo de INTEGRAL S.A., INTEGRAL INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN S.A.S. y COLPENSIONES, por haber sido vencidos en el recurso de apelación. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$1.300.000, dividida en partes iguales entre las demandadas.

## 7. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE:**

**PRIMERO. CONFIRMAR** la sentencia del 16 de septiembre de 2021 proferida por el JUZGADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por el señor **JORGE ENRIQUE RÍOS SARRIA** contra las sociedades **INTEGRAL S.A., INTEGRAL INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN S.A.S.** y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES**, según las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

**SEGUNDO: ADICIONAR** la sentencia de primera instancia, en el sentido de DECLARAR que respecto del porcentaje del descuento del aporte al sistema de salud no se causa la indexación que se condena a pagar a favor del demandante fallecido.

**TERCERO:** Se **PRECISA** que la obligación de COLPENSIONES de pagar la pensión al demandante, surge, cuando COLPENSIONES haya recibido efectivamente el cálculo actuarial, a su satisfacción.

Se podrá hacer uso del proceso ejecutivo para lograr que INTEGRAL S.A. e INTEGRAL INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN S.A.S., cancelen a COLPENSIONES, el importe del cálculo actuarial, si no lo paga oportunamente.

**CUARTO: ADICIONAR** la sentencia, en el sentido que la condena que se le impone a COLPENSIONES, al reconocimiento y pago la pensión de vejez, a que tuvo derecho el fallecido JORGE ENRIQUE RÍOS SARRIA, debe realizarse a favor de la masa sucesoral, y podrá ser reclamado con el trámite de pago a herederos ante Colpensiones, o en proceso sucesorio.

**QUINTO:** Costas en esta instancia a favor del demandante y a cargo de INTEGRAL S.A., INTEGRAL INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN S.A.S. y COLPENSIONES. Las agencias en derecho las estima el ponente en la suma de \$1.300.000, de la que responden en partes iguales las demandadas.

La anterior sentencia se notifica a las partes en EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado

Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ab0240d3cbb59a4b652bf01512721ad675da83d5a8d4dc7aea6f3a701a23849d**

Documento generado en 08/03/2024 02:36:18 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**